

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México por el C. Miguel Rufo, como Administrador y representante de la Empresa del Ferrocarril Urbano, contra un acuerdo del Ayuntamiento de esta Capital por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 2º de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el presente recurso de amparo se ha interpuesto por el C. Miguel Rufo, contra el Ayuntamiento de esta Capital, por la orden suspensiva que acordó, de los trabajos que continuaba la empresa en el ramal de la vía que debe seguir por las calles del Refugio, Colegio Viejo, etc.

Acompañó el C. Rufo, como fundamentos del recurso interpuesto, varios recados, siendo el primero, el comprobante de que en 25 de Abril del año anterior próximo pasado y á petición suya, le hizo el Ayuntamiento concesion, para construir una doble vía desde San Fernando hasta la Tlaspala, con las condiciones que expresa la concesion, é igualmente, para construir un ramal de vía urbana, que partiendo del Empedradillo, siguiera en línea recta por las calles de Santo Domingo, hasta la garita de Peralvillo, ocupando el lado oriental de la calle etc. Se le hizo concesion tambien, para otro ramal, que saliendo de la calle del Empedradillo, siguiera por el frente de los portales de Mercaderes, Diputacion y las Flores, calles de Flamencos etc.

En la cuarta de las proposiciones aprobadas por el Ayuntamiento, se dijo: "Manifiéstese al C. Rufo, que el Ayuntamiento no acepta la devolucion que hace la Empresa del Ferrocarril Urbano de la concesion que se le hizo en 1870, para que construyera un ramal de vía Urbana desde la calle del Empedradillo, frente del portal de

Mercaderes, calle del Refugio, Colisco Viejo, Independencia etc., y que por el contrario, le fija el plazo de diez y ocho meses contados como los anteriores para la construccion del ramal mencionado.

A fojas 6, se halla una minuta del ocurno del C. Rufo al Ayuntamiento, aceptando la insistencia por parte de este en el permiso á que se refiere esta cuarta proposicion de las aprobadas, pudiendo en dicho ocurno, se modificara por lo innecesario que era ya el que se renunciara ese ramal con la vía de Tacubaya, por el trayecto de San Fernando y Calzada del Calvario, cuyos rieles iban á quitarse, proponiendo que la citada línea del Refugio, pasada la 1ª calle de la Independencia, en lugar de seguir la línea recta, torciera por las muy anchas de San Juan de Letran y Santa Isabel, á ligarse en la plazuela de la Mariscala con su respectiva doble vía. Fué aceptada esta modificacion por el Ayuntamiento, y así consta del oficio fojas 7, fecha 26 de Mayo de 1873.

Por último, el oficio de fojas 8 contiene las tres proposiciones aprobadas por el actual Ayuntamiento en 25 de Agosto del presente año, contraídas la primera, á que se participara á la Empresa del Ferrocarril Urbano, que el Ayuntamiento retiraba la obligacion que le habia impuesto al concesionario, en 25 de Abril del año anterior próximo pasado, de poner un ramal que partiendo del Empedradillo continuara por el portal de Mercaderes, calles de Tlapaleros, Refugio etc.; la segunda, que ni á la actual Empresa del ferrocarril Urbano, ni á ninguna otra que se formara en lo sucesivo se podria conceder permiso para tender rieles por las calles mencionadas; tercera, que se comunicara al C. Gobernador del Distrito para su conocimiento, insertándose íntegra á la Empresa para su inteligencia, y para que desde luego suspendiera la obra que estaba ejecutando en la esquina del portal de Mercaderes y calle de Tlapaleros.

Estos son los recados que se acompañan para fundar el recurso de amparo, y dedu-

cir de ellos el quejoso: "Que el procedimiento de la Corporacion municipal, ataca de una manera directa los derechos y posesion de la Empresa que representa, puesto que dicha Corporacion se ingiere en negocios que son ya de la exclusiva propiedad de la Empresa, y que aquella no es autoridad competente para resolver por sí y ante sí negocios que han celebrado los otros Ayuntamientos, con empresas particulares, ni su simple voluntad es causa legal que funde ó motive la de semejante proceder." De estas consideraciones, y de las otras que hace mérito, deduce el C. Rufo: "Que el Ayuntamiento actual ha violado el artículo 16 de la Constitucion.

La Corporacion acompaña á su informe, por vía de justificacion, los mismos comprobantes de que hace mérito el quejoso, con mas, una copia del ocurso que este le dirigió el 28 del mes anterior de Agosto pidiéndole la revocacion del acuerdo del dia 25 del propio mes.

Este informe que corre de la foja 28 á la 35 vuelta, contiene apreciaciones de derecho que el muy ilustrado síndico que lo suscribe, procura sostener con su reconocida inteligencia y nada comun instruccion.

Dejando por ahora el Promotor, el hacerse cargo de la duda que suscita el Sr. síndico acerca de la personalidad del C. Miguel Rufo, pasa á ocuparse de los fundamentos de que hace mérito el Ayuntamiento, para sostener su acuerdo, siendo el primero, que tocando á la municipalidad la gestion de los intereses locales, así como todo lo que se refiere á la policía urbana, cuyo carácter tiene sin duda el negocio de que se trata, fué competente para dictar el acuerdo suspensivo de los trabajos de la Empresa. Cita la doctrina del Sr. Laboulaye, que dice: "El interes general, es todo lo que está fuera de los intereses locales, cuya gestion no pertenece mas que á la municipalidad." La del Sr. Madrazo, en su manual de Administracion, recuerda la obligacion que imponen las leyes á los

TOMO VI.—PARTE II.

Ayuntamientos, de velar por sus intereses, y las ordenanzas de esta Ciudad de México, aprobadas por Felipe V. en 4 de Noviembre de 1728, cuyo artículo 112 recomienda el cuidado que debe tener el Ayuntamiento, de los empedrados, plazas, entradas y salidas de la Ciudad etc.; prevenciones todas, muy conformes al objeto de la institucion municipal.

El que suscribe, no pone en duda esas atribuciones, y las reconoció el C. Rufo, puesto que ocurrió á dicha Corporacion, pidiéndole la concesion de la vía Urbana y los ramales que expresó: de consiguiente, la cuestion actual, no versa verdaderamente, sino acerca del abuso que se supone, y extralimitacion de esas atribuciones.

En efecto, ¿está en las de un Ayuntamiento no respetar y nulificar acuerdos de otro Ayuntamiento, cuando este ha procedido en la forma legal y con pleno conocimiento de causa? ¿Puede desconocer á su arbitrio, derechos transmitidos á un concesionario, para hacer tal ó tal cosa bajo las consideraciones que le impuso y que este aceptó por su parte? Estas y aun muchas mas cuestiones, entrañan las teorías, y se asientan y se sostienen como principios inconcusos en el informe á que me vengo refiriendo.

La concesion hecha por el Ayuntamiento de 1870 y 1873, á la Empresa del ferrocarril Urbano para construir una vía y sus ramales por tales y tales calles, importa para el concesionario, derechos y obligaciones: los primeros, para construir la vía, y las segundas, para cumplir por su parte, con las condiciones impuestas en la concesion.

Para el concedente derecho para exigir el cumplimiento del objeto de la concesion y de las condiciones que impuso al concesionario y obligacion al mismo tiempo por su parte, de respetar dicha concesion, y de no alterarla, sino es de acuerdo con el concesionario. Verdadero contrato de los innominados de: *Do ut facias*, por el que se contrajo un vínculo que sujeta á las partes

que lo contraen á prestaciones reciprocas.

Si llegara á sancionarse como principio, que un Gobierno, que una Corporación, que cualquiera Empresa, tenia el derecho de sustraerse por sí y ante sí de las obligaciones que legalmente contrae, sería tal principio subversivo del orden social, pues así como es justo todo lo que tiende á hacer respetar la seguridad, la libertad, la propiedad de derechos sagrados del hombre, derechos imprescriptibles é inviolables; por el contrario, todo lo que ataque y lastime cualquiera de esos derechos, no es mas que injusticia. Y la injusticia no puede mantener en paz y en orden á las naciones, ni á los pueblos, ni á los particulares. El orden moral, dice un escritor, lo mismo que el orden físico, tiene sus relaciones, sus reglas y sus leyes constantes, y jamas se pueden turbar impunemente.

Se dice en el informe, que si bien el Ayuntamiento, como entidad moral, puede contraer derechos y obligaciones, debe tenerse presente que tambien ejercita actos propios de la autoridad que representa y que están fuera del derecho privado; que si contrata, no puede por sí mismo resolver sobre la fuerza obligatoria de sus contratos, ni apartarse de las obligaciones que se ha impuesto; pero que si obra como autoridad, no es discutible su competencia dentro del círculo de sus intereses locales, si bien sus actos sean revisables por una autoridad superior. Y como consecuencia de esta teoría, asienta el Ayuntamiento que en el caso presente ha obrado en ejercicio de la autoridad propia de su institucion, y no como persona moral, no como gestor del patrimonio de la Ciudad.

Francamente hablando no comprende el Promotor este dualismo bajo el que se considera el Ayuntamiento. Lo único que comprende es, que en lo sucesivo no haya seguridad alguna respecto de todo acto en el que tenga que intervenir el Ayuntamiento, porque segun su teoría, hay que abstenerse de todo contrato con dicha corporacion; pues

dirá: es verdad que te permití el hacer tal ó tal cosa, y aunque tu has cumplido con las condiciones que te impuse, yo, Ayuntamiento, no estoy obligado á mantenerte en los derechos que te concedí, aunque te obligué á erogar crecidos gastos, á comprometer tu crédito etc. etc., porque como obré como autoridad y no como cuerpo moral, no estoy obligado.

Bajo el otro aspecto de la teoría, puede decir el Ayuntamiento: es verdad que yo como cuerpo moral contraté contigo, te concedí derechos y te impuse obligaciones que estás cumpliendo; es verdad que te comprometí en gastos; que haces valer tu crédito para proporcionarte recursos; pero no estoy obligado á respetar esos derechos que yo mismo te concedí y que ejercitas, porque como autoridad puedo desconocer lo que hice, lo que concedí como cuerpo, como entidad moral capaz de contratar. No es posible admitir tal teoría subversiva de todo orden, de toda conveniencia y justicia. Teoría apenas pasable para discusiones en las que se hace alarde de ingenio.

El Ayuntamiento toma ya otro rumbo y dice: que no pudo haber contrato porque faltaba la capacidad de uno de los contratantes, nada menos que la del Ayuntamiento, y ademas el objeto lícito. Fallo lo primero, porque se requería la autorizacion expresada del Gobernador del Distrito, ó su aprobacion para contratos de la importancia del que aquí se supone, cuyo requisito no se llenó al otorgarse el permiso á la Empresa.

Que tampoco hubo objeto lícito, porque siendo las calles de propiedad pública y de uso comun, no pueden ser, por lo mismo, objeto de un contrato, toda vez que ni la propiedad, ni la posesion de ellas pueden entrar al dominio particular, y ser materia de comercio entre los hombres. Consecuencia:

No hubo Juez ni pudo haber contrato válido en la concesion del permiso de que se trata.

El Promotor ha tenido y tendrá necesi-

dad de asentar las razones y fundamentos del informe del Ayuntamiento, porque es de su obligacion fundar su pedimento, ya en pró ó en contra del amparo. Así pues, entiende que no puede sostenerse la falta de personalidad del Ayuntamiento; lo primero, porque la concesion que se hizo á la Empresa del ferrocarril urbano, no importaba gastos ó gravámenes para el tesoro municipal, en cuyo caso se necesita la autorizacion del Gobernador del Distrito; y si era indispensable el llenar ese requisito, debió hacerse lo mismo respecto del acuerdo último de 25 de Agosto, y ya hemos visto que solo se le comunicó para su conocimiento.

No puede calificarse de ilícito el objeto de la concesion, porque en la legal acepcion de esta palabra, solo es ilícito lo que es contra la ley; y la concesion de una vía urbana, podrá ser inconveniente; pero jamas ilícita, puesto que no hay ley entre nosotros que prohiba la construccion de vías férreas urbanas.

En cuanto á que siendo las calles de propiedad pública y de uso comun no pueden ser objeto de un contrato etc., se deberá tener presente, que la autorizacion de las vías urbanas no importa traslacion de dominio ni posesion material de las calles por donde corra; se autoriza únicamente el establecer para el tránsito de los habitantes, una vía en una parte de esas calles, no para el uso exclusivo del concesionario ó de persona ó personas determinadas, sino para el uso comun, como uno de los medios que en mejores condiciones se le facilitan á los habitantes para su mayor comodidad y para abreviarles las distancias á bajo precio; es un beneficio que se les proporciona y que son libres los habitantes para aceptarlo ó no, como mejor les parezca.

Se sigue diciendo en el informe: "Que lo que otorgó el Ayuntamiento en 1870 al ferrocarril urbano, fué una concesion pura y exclusivamente graciosa, de las que son propias de la autoridad administrativa, y en las que solo ella puede y debe entender, segun

la disposicion de las ordenanzas y leyes municipales de que ha hecho mención. En buena hora que el Ayuntamiento no deba revocar arbitrariamente tales permisos; pero esto lo que quiere decir es, que debe proceder con justificacion y no que deje de ser competente."

Hasta este fundamento habia venido el Ayuntamiento discurrendo, dándole diversas formas á la concesion. Ya como contrato, en el que no tuvo personería legítima el Ayuntamiento porque faltó la aprobacion del Gobernador del Distrito; ni objeto lícito, porque siendo las calles del comun, no podian ser objeto de contrato. Ahora la varía de aspecto, pues dice: que fué una concesion pura y exclusivamente graciosa, de la exclusiva atribucion administrativa.

Con toda la buena fé del Ministerio fiscal manifiesta el Promotor: que entre todos los fundamentos expuestos por el Ayuntamiento en su informe, este es el que á primera vista parece incontestable, y por lo mismo ha procurado sin preocupacion de ningun género, examinarlo, no como una tesis en abstracto, sino en su aplicacion al caso presente.

Si bien las concesiones meramente graciosas son revocables cuando solo ceden en pró y beneficio del concesionario, deberemos examinar si la concesion de que se trata es pura y exclusivamente graciosa, pues de lo contrario seria dar por probado lo que es preciso probar, y para esto el que suscribe plantea la cuestion bajo la forma siguiente:

"¿Las concesiones que haga un Ayuntamiento en bien de la Ciudad, son revocables? Desde luego el que suscribe cree que nó, si en la concesion hay beneficio para el que la otorga y obligaciones onerosas para el concesionario, resultando entonces un trato en el que hay prestaciones mútuas.

El Ayuntamiento de 1870 y el de 1873 como administradores, como gerentes del

comun de la Ciudad de México, concedieron y autorizaron al C. Miguel Rufo, como administrador de la Empresa de vía urbana, el establecerla para el servicio y uso comun de los habitantes de esta Ciudad de México, como una mejora notable y que demandaba ya su civilización; una vía con diversos ramales que facilitarían el movimiento interior, poniendo al concesionario diversas obligaciones. Es público y notorio que el plantear estas vías demanda fuertes gastos; pedidos al extranjero materiales que no se encuentran en nuestro país y adelanto de fuertes sumas para preparar y reunir dichos materiales.

Hé aquí, pues, además de las condiciones impuestas en la concesión y de la obligación de construir una de las partes verdaderamente onerosas, sin mas retribución para el concesionario que la de una esperanza incierta de indemnizarse, y obtener con no poco trabajo un rédito que sería muchísimo mayor, empleando ese capital en otras especulaciones, mientras que para el cedente ó otorgante resulta un beneficio cierto y sin gravámen para el comun de los habitantes. Siendo esta una verdad de hecho, ¿cómo puede considerarse ante el buen sentido, ante la razón y ante la equidad, que la concesión á que nos venimos contrayendo es meramente graciosa, y por lo mismo revocable por el que la otorgó, cuando le plazca? Ante la equidad, que como dice un escritor, se resiste de suyo á ideas sutiles, y su fisonomía ó rasgos distintivos son: aquella simplicidad que cautiva el corazón á la par que el entendimiento. Y es de tomarse en consideración en el caso presente, por habersele obligado al concesionario en 1873 á que construyera, estando aun la *cosa íntegra*, el ramal de la vía, cuyos trabajos ha mandado suspender el actual Ayuntamiento, por su acuerdo ya mencionado del 25 de Agosto próximo anterior, cuya redacción á la letra es como sigue:

“Dígase á la Empresa del ferrocarril urbano, que el Ayuntamiento retira la obliga-

ción que le impuso por su acuerdo de 25 de Abril del año próximo pasado, de poner un ramal etc.”

Este fraseo no está en armonía con lo que asienta y pretende sostener el Ayuntamiento, de que la concesión fué meramente graciosa, pues lógicamente hablando debió decir: La gracia que te concedí te la retiro, pues no puede convenirse que una empresa ó un particular acepte obligaciones onerosas, sin la esperanza siquiera de compensarlas mediante la reciprocidad de derechos.

En cuanto á la personalidad de D. Miguel Rufo, séale permitido al Promotor manifestar, que hay ciertas escepciones que no está bien el aducirlas á una corporación respetable y tan digna como lo es bajo todos aspectos el Ayuntamiento actual de la Capital de la República. En todos los documentos que corren en este expediente, se ha entendido el Ayuntamiento con D. Miguel Rufo, como Administrador del ferrocarril urbano: á él se le pasó el acuerdo de la concesión: á su pedido se hizo la modificación del ramal que debía terminar en la plaza de toros. ¿Por qué, pues, dudar de su personalidad cuando á dicho Sr. Rufo se le hicieron dichas concesiones? ¿Por qué no reputarlo parte legal para interponer el presente recurso de amparo?

El Promotor en cumplimiento de sus deberes, se ha visto en la precisión de examinar el presente negocio con todo detenimiento, pues se trata de una corporación respetable; de cuestiones trascendentales que salen de la esfera de las comunes; de mejoras que la civilización del siglo va introduciendo y difundiendo en todos los pueblos, en beneficio comun; se trata del espíritu de empresa que lejos de ponerle rémoras y obstáculos, procuran los Gobiernos ilustrados, entre los que figura, con justos títulos, el de nuestra República, protegerlo con recursos materiales, con su influjo, con su prestigio. Tales consideraciones, son y deben ser superiores á esas nimiedades de fórmula que no están

á la altura de negocios de la naturaleza del que nos ocupamos.

La opinion de que en materia de policía es omnímoda la facultad de los ayuntamientos, peca contra el buen sentido cuando se acepta de una manera absoluta; peca contra la idea filosófica que no reconoce mas entidad de esta naturaleza que la del Ser Supremo.

Decendiendo ahora al punto del amparo que se pide, dirá el Promotor que el art. 16 de la Constitucion previene en lo conducente: Que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, pepeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la *autoridad competente*, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Deberá, pues, examinarse si el Ayuntamiento al acordar la suspension, objeto del presente recurso de amparo, ha sido competente:

La suspension de una obra cualquiera, cuando el que la está haciendo tiene título que lo autoriza para tal efecto, no puede suspenderse sino por diversa autoridad, con pleno conocimiento de causa, y no por aquel que se cree perjudicado, pues seria tanto como constituirse juez y parte en causa propia. Y por mucho que se quiera sutilizar en el caso presente, no ha podido el Ayuntamiento clasificar ni interpretar, sin audiencia previa de la Empresa, la naturaleza de la concesion segun supropia opinion, y menos eximirse por sí y ante sí de las obligaciones y derechos recíprocos de todo contrato, acordando la suspension, contra el ejercicio de derechos legítimamente adquiridos.

Por todo lo expuesto y con plena conviccion, quizá errónea, concluye el Promotor que suscribe pidiendo al Juzgado se sirva declarar: Que la Justicia de la Union protege y ampara al C. Miguel Rufo, como concesionario y administrador de la Empresa de la vía urbana, contra el acuerdo del actual Ayuntamiento de esta Capital, fecha 25 de Agosto del presente año, que mandó

suspender los trabajos del ramal de dicha vía, que conforme á la modificacion acordada por el Ayuntamiento de 1873, debe ir por las calles de Tiapaleros, Refugio, Coliseo Viejo y demas comprendidas en la concesion, pues dicho acuerdo importa una violacion del art. 16 del Pacto fundamental de la República.

México, Setiembre 28 de 1874.—*J. Biviano Beltrán.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México, Octubre 17 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Miguel Rufo en nombre y como Administrador de la Empresa del ferro-carril urbano, á virtud de reputar violadas en la persona del concesionario de la linea ó ramal del Empedradillo á Betlen, las garantías que consignan los artículos 14, 16 y 27 de la Constitucion, con el acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad fecha 25 de Agosto del presente año; visto el informe rendido por el expresado Ayuntamiento, como autoridad responsable en el caso; lo pedido por la parte fiscal; los documentos presentados por el quejoso, y visto en fin lo que verse debia: atendiendo, á que la violacion de garantías que se pretende efectuada, se hace consistir en que al hacerse la concesion á la Empresa por el expresado ramal del Empedradillo á Betlen, se verificó un contrato entre ambas partes, puesto que para una y otra se consignan expresamente derechos y obligaciones, habiendo ocurrido ademas en corroboracion del carácter de tal contrato, el haberse estrechado al cumplimiento á la parte de la Empresa, cuando pretendió se le exonerase de la formacion del expresado ramal; que esto supuesto, al resolverse posteriormente por acuerdo del Ayuntamiento y cuando ya la parte de la Empresa habia comensado sus trabajos materiales, que se suspendiese la obra dándose por retirada ó revocada la concesion, con tal acto se violan



las garantías de los artículos citados; porque la resolución se ha dictado por autoridad incompetente, dándosele efecto retroactivo, y además expropiando al quejoso; y

Considerando 1º: que si bien el art. 27 no es de reputarse infringido por el acuerdo ya citado, porque la expropiación constitucional no puede decirse tiene lugar sino es cuando la autoridad despojante, reconociendo precisamente la propiedad del despojado, dicta su providencia sin la precisa indemnización ó sin apoyo de la circunstancia de utilidad pública; sin embargo, con relación á los artículos 14 y 16 hay que tenerse presente, que según los términos del acuerdo de 26 de Abril de 1873, se celebró un verdadero contrato entre la Empresa ó su representante y la citada Corporación; pues *contrato, es el consentimiento de dos ó mas, en dar ó hacer alguna cosa; y por sus efectos se producen mutuos derechos y obligaciones que no se pueden al arbitrio de una sola de las partes invocar, encerrarse ó eludir en manera alguna, debiendo en caso de diferencias ó falta de cumplimiento, resolverse en la vía judicial, puesto que de otra suerte sería constituirse uno de los contrayentes en juez y parte: que bajo tal concepto al Ayuntamiento no puede reputársele competente para llevar á efecto el acuerdo de 25 de Agosto, sino es con infracción del artículo 16 de la Constitución; y*

Considerando 2º: que consiguiente á las razones mencionadas, el quejoso tiene adquiridos legítimos derechos emanados del contrato ó concesión, si al Ayuntamiento se le reputa en el caso como mera autoridad que otorga ó concede, cuyos derechos no podrían variarse ó ser destruidos por determinación posterior, sin darle á esta efecto retroactivo en contravención á la garantía individual que consagra la Constitución en su art. 14; por tales consideraciones, se declara:

Que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Miguel Rufo, como concesionario ó representante de la Empresa del ferro-carril urbano, contra el acuerdo del Ayunta-

miento de esta Ciudad, dictado en 25 de Agosto del presente año, por violarse con él las garantías que consignan los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Hágase saber, remítase copia al *Diario Oficial y Semanario Judicial*; y elévense los autos, previa citación fiscal, á la Corte Suprema de Justicia.

Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José M. Canalizo.—Fernando Zamora, secretario.*

Es copia. México, Octubre 22 de 1874.—*Fernando Zamora, secretario.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 27 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital por el C. Miguel Rufo como Administrador y representante de la Empresa del ferro-carril urbano, contra un acuerdo del Ayuntamiento de esta misma Ciudad, fecha 25 de Agosto último, por el que se mandó que la Empresa suspendiera sus trabajos en la línea que partiendo de la Calle del Empedradillo, debía atravesar por el frente del portal de Mercaderes y las calles del Refugio, Colisco viejo &c, según la concesión que se le hizo á la misma Empresa en 19 de Julio de 1870; con cuyo procedimiento considera el quejoso se vulneran las garantías que reconoce la Carta fundamental de la República en sus artículos 14, 16 y 27. Visto el informe producido por el mismo Ayuntamiento, alegando entre varias razones que, en 26 de Abril del año próximo pasado, la Empresa pretendió devolver la concesión que se le había hecho para establecer dicha línea, y que aunque entonces el Ayuntamiento no lo consintió, hoy pudo con derecho retirarla, como de facto lo verificaba exonerando á la Empresa de la obligación que entonces le impuso de que concluyera sus trabajos en el término de diez

y ocho meses. Vistos los documentos presentados por el promovente, y por el Ayuntamiento al tiempo de su informe. La recusacion que del Juez 1º hizo el quejoso; el pedimento del C. Promotor fiscal; el alegato del mismo promovente; la sentencia del Juez 2º de Distrito y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente; y

Considerando: que la concesion hecha á la Empresa del ferro-carril urbano en el cabildo del 19 de Julio de 1870 importa un verdadero contrato que produjo obligaciones y derechos que no pueden desvirtuarse por uno de los contrayentes, sin el consentimiento del otro; con tanta mas razon, cuanto que con el acuerdo del mismo Cabildo en 26 de Abril del año próximo pasado de no aceptar la devolucion que de la concesion hacia la Empresa, ratificó la forma de contrato que hoy no reconoce: que si el Ayuntamiento cree tener algun derecho para no llevar adelante lo pactado, así como para considerar nula la concesion por falta de algunos requisitos legales, estos derechos los debe deducir ante los Tribunales y nunca usar de su autoridad en causa propia. Se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del inferior que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Miguel Rufo, como concesionario ó representante de la Empresa del ferro-carril urbano, contra el acuerdo del Ayuntamiento de esta Ciudad, dictado en 25 de Agosto del presente año, por violarse con él las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Mº Altamirano.*—*Ignacio Ramírez.*—*Simon Guzman.*—*L.*

*Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José G. Ramirez.*—*José Mª Lozano.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 29 de 1874.—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por el C. José Calva, en representacion del C. Matías Alzúa, contra el C. Recaudador de Guaymas, que le exige el pago de una cantidad de pesos.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Fiscal que suscribe, no puede menos que pedir favorablemente al quejoso D. Matías Alzúa, porque cree legales los fundamentos en que se apoya su solicitud. El derecho de quinto que ha establecido el Congreso del Estado, en su ley de clasificacion de rentas de 4 de Diciembre del año próximo pasado, lo hace sobre la exportacion de platas, para lo cual está prohibido imponer á los Estados, sino es previo el consentimiento del Congreso de la Union, el cual hasta ahora no lo ha tenido, (art. 112, frac. I de la Constitucion federal) y por consecuencia natural, infringiendo ese artículo, se le violan al quejoso las garantías que le otorga la Constitucion general en su art. 16.

No quedando otro recurso legal para desagraviarlo, que el que se resuelva el amparo tal y como se solicita.

Guaymas, Agosto 31 de 1874.—*Lic. J. Monteverde.*

Es copia que certifico. Guaymas, Setiembre 1º de 1874.—*José Monteverde.*



